

**No. 14668. Multilateral**

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Guatemala**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 2 August 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 2 August 2016*

**N° 14668. Multilatéral**

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

**Guatemala**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 2 août 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 2 août 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

I

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2016**

Guatemala, 21 de junio de 2016

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

**CONSIDERANDO**

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala establece y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos derechos previa declaración del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público.

**CONSIDERANDO**

Que como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan en todo el territorio de la República de Guatemala, especialmente en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, se produjeron deslaves en las faldas del Volcán Chingo, las que arrastraron corrientadas de lodo, piedras y otros sedimentos a la comunidad, ocasionando daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de servicios esenciales, y que las autoridades del lugar temen que ese municipio quede soterrado bajo la tierra del volcán si los deslaves continúan. Por lo anterior, es necesario y conveniente, adoptar urgentemente todas las medidas y acciones para su reconstrucción, rehabilitación y atención; para lo cual se procede a emitir el Decreto que contenga la Declaratoria de Estado de Calamidad Pública en el municipio del departamento anteriormente mencionado.

**CONSIDERANDO**

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus funciones están establecidas en el Decreto Legislativo Número 109-98, siendo un ente coordinador de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio deberá de regir de preeminencia en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales y provocados.

**PORTANTO**

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 139 de la misma; y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público; 44 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA

Artículo 1. Declaratoria. Declarar al estado de calamidad pública en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa de la República de Guatemala.

Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se declara, como consecuencia de las fuertes lluvias que han provocado deslaves en el municipio de Jerez departamento de Jutiapa, que han producido daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de servicios esenciales, en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, afectando también la actividad productiva y el desarrollo humano.

Artículo 3. Objeto. El estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar los daños y restablecer la infraestructura vial y estructural, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes.

Artículo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto.

Artículo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede.

Artículo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan las medidas siguientes:

- a) Implementar todas las acciones que atiendan los daños derivados de los efectos de los deslaves producidos por las fuertes lluvias en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, que arrojó toneladas de toda y piedras provenientes del Volcán Chingo, así como prevenir el riesgo que el mismo produce, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED- coordinará el respectivo.
- b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden;
- c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden.
- d) Exigir e todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas.
- e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes que se localizan directamente en las áreas de infraestructura de vivienda y servicios colapsados, y.
- f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los servicios públicos básicos y esenciales.

Artículo 7. Adquisiciones. De acuerdo a lo que establece el Decreto Número 67-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del Estado, mientras esté vigente el estado de calamidad, no se será obligatoria la licitación ni la obtención a las dependencias y entidades públicas, para la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas del estado de calamidad que por el presente Decreto Gubernativo se declara y que hayan ocasionado o pudieran ocasionar, en forma inminente, las suspensiones de los servicios públicos. En todo caso, deberán llevarse a cabo las publicaciones que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otras relacionadas. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otras relacionadas que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y desarrollo de las comunidades locales del municipio del departamento afectado, deberán ser consignadas y registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, debidamente respaldadas por la solicitud de asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las

que se darán a conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los casos que las donaciones vengán consignadas a otras instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá realizar el "endoso legal" a favor de -CONRED-, antes de realizar los trámites de importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los requisitos y normas establecidas para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-. En todos los casos, el ingreso de las donaciones eventuales quede bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la calamidad pública, deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, antes de que éste autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.

Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el Organismo Ejecutivo así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República, deben participar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinan para garantizar a la población la prestación de los servicios públicos esenciales.

Artículo 10. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el mantenimiento de la paz y el orden público.

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender esta emergencia y traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto de conformidad con sus mandatos legales, y, facilite las gestiones administrativas correspondientes para la oportuna y adecuada recepción de las donaciones en base a lo que establece el artículo 8 de este Decreto.

Artículo 12. Comunicación. Procedase a hacer del conocimiento del Honorable Congreso de la República el contenido del presente Decreto, para los efectos previstos en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y, oportunamente, preséntese a ese Organismo de Estado Informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Público.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América.



COMUNIQUESE

*[Handwritten signature]*  
JIMMY MORALES CABRERA

*[Handwritten signature]*  
JAFETE ERNESTO CABRERA FRANCO  
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

*[Handwritten signature]*  
Francisco Manuel Rivas Lara  
Ministro de Gobernación

II

*Ministerio de Relaciones Exteriores  
Guatemala, C. A.*

DH/360-000-416-16

Guatemala, 27 de junio de 2016.

Señor Secretario General:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en cumplimiento al artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para hacer de su conocimiento que mediante Decreto Gubernativo número 2-2016, el Señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, el 21 de junio de 2016, declaró Estado de Calamidad Pública en el Municipio de Jerez, Departamento de Jutiapa, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia de dicho Decreto.

La medida antes indicada, se declara como consecuencia de las fuertes lluvias que han provocado deslaves en el Municipio de Jerez, Departamento de Jutiapa, han producido daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como a la prestación de servicios esenciales, afectando también la actividad productiva y el desarrollo humano. En ese sentido, el Estado de Calamidad tiene por objetivo mitigar los daños y restablecer la infraestructura vial y estructural, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes.

Excelentísimo Señor Ban Ki-moon  
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas  
Nueva York

Al respecto, se adoptaron medidas que restringen la vigencia del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo referente a la libertad de locomoción.

En virtud de lo anterior, ruego a su Excelencia que por su conducto sean informados los demás Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Aprovecho la ocasión para expresar al Señor Secretario General, las muestras de mi más alta consideración y estima.



**Alicia V. Castillo Sosa**  
Viceministra de Relaciones Exteriores



[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

Executive Branch  
Office of the President of the Republic  
Government Decree No. 2-2016  
Guatemala City, 21 June 2016

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC,

WHEREAS the State and its authorities have an obligation to guarantee to the inhabitants of Guatemala the full enjoyment of the rights established in the Political Constitution of the Republic of Guatemala, and the full application of some rights may be suspended during states of emergency, subject to a declaration by the President of the Republic, in concert with the Cabinet, describing the nature and gravity of the situation and applying such legal measures as are strictly necessary in accordance with the Public Order Act,

WHEREAS the heavy rainfall affecting the entire national territory, especially the municipality of Jerez in the Department of Jutiapa, has resulted in landslides on the slopes of the Chingo volcano, which have deluged the community with mud, stones and other debris, damaging roads, housing, schools, health facilities and other infrastructure and impairing the provision of essential services, and the local authorities fear that the municipality may be buried under soil and debris from the volcano if the landslides continue, and all possible measures and action must therefore be taken as a matter of urgency to rebuild, restore and assist it, to which end a decree is hereby adopted declaring a state of emergency in the aforementioned municipality,

WHEREAS the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters (CONRED) is a Guatemalan State institution set up to prevent, mitigate and assist in dealing with the damage caused by disasters and to participate in rehabilitation and reconstruction, and its functions are set forth in Legislative Decree No. 109-96, under which it has responsibility for coordinating the activities of public and private entities to that end and is the overriding authority for measures to deal with natural and man-made disasters,

THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by articles 1, 2, 3, 138, 182 and 183(f) of the Political Constitution of the Republic of Guatemala and on the basis of article 139 of the Constitution, articles 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 and 36 of Decree No. 7 of the National Constituent Assembly: Public Order Act, and article 44 of Decree No. 57-92 of the Congress of the Republic: State Contracting Act,

IN CONCERT WITH THE CABINET,

DECREES AS FOLLOWS:

Article 1. Declaration. A state of emergency is hereby declared in the municipality of Jerez, Department of Jutiapa, Republic of Guatemala.

Article 2. Justification. The state of emergency is being declared as a result of landslides caused by heavy rainfall in the municipality of Jerez, Department of Jutiapa, which have damaged roads, housing, schools, health facilities and other infrastructure and impaired the provision of essential services, production activities and human development.

Article 3. Purpose. The purpose of the state of emergency is to mitigate the damage, repair roads and buildings, restore essential services and minimize the impact, and to enable the necessary measures to be taken, in places where circumstances so warrant, to avoid or reduce the impact of the disaster and, above all, to protect the life, physical integrity and safety of the affected or at-risk population and to safeguard their property.

Article 4. Period of application. The state of emergency is declared for 30 days beginning from the date of entry into force of this Decree.

Article 5. Rights subject to restriction. The full application of the rights set forth in articles 5 and 26 of the Political Constitution of the Republic of Guatemala shall be restricted for the period indicated in the preceding article.

Article 6. Measures. During the state of emergency, the following measures shall be taken:

(a) All necessary measures shall be taken to deal with the damage resulting from the impact of the landslides caused by heavy rainfall in the municipality of Jerez, Department of Jutiapa, which have deluged the community with mud and stones from the Chingo volcano, and to mitigate the risk that this presents; these measures shall be taken in such manner, circumstances and places as the situation requires and shall be coordinated by the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters;

(b) The right of liberty of movement shall be restricted and persons in affected or at-risk locations shall be either removed from or allowed to remain in their homes, as circumstances require;

(c) Cordons sanitaires shall be established to restrict the movement of vehicles and prevent the entry of persons to affected or at-risk areas, as circumstances require;

(d) All private individuals shall be required to provide the assistance and cooperation deemed essential for controlling the situation in affected areas more effectively;

(e) Residents of housing located in the so-called "high-risk" area shall be encouraged to relocate, and priority shall be given to residents of in areas where infrastructure, housing and services have collapsed; and

(f) The civilian and military authorities, under the coordination of the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters, shall be ordered to take all necessary measures to protect and safeguard the life, physical integrity, safety and property of persons living in the places in question and ensure the provision of basic essential public services.

Article 7. Procurement. Under Decree No. 57-92 of the Congress of the Republic: State Contracting Act, as long as the state of emergency remains in force, public entities and units shall not be required to seek bids or quotations for the procurement of goods, supplies, works and services essential for addressing situations arising from the state of emergency declared by the present Decree that have caused, or could imminently cause, the suspension of public services. In any case, procurement processes shall be publicized as required by the implementing regulations of the State Contracting Act.

Article 8. Donations, humanitarian aid and assistance, recovery and related assistance. Donations, humanitarian aid and assistance, recovery and related assistance for helping, rehabilitating and rebuilding the municipality of Jerez and building its local capacities shall be addressed and registered to the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters and duly supported by a request for international humanitarian aid and assistance issued through the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala, and shall in all cases comply with the customs, tariff and non-tariff requirements and rules in force in the country, which shall be communicated to international cooperating agencies along with the request for international humanitarian assistance. Where donations are addressed to other public institutions or to national or international non-governmental organizations duly accredited and represented in the country, the addressee shall endorse them over to the National Coordination Office before undertaking the procedures for importing the donations. Imported donations shall be duly supported by the rules and requirements established by the National Coordination Office. In all cases, the entry of exempt donations shall remain under the control and supervision of the Tax Administration Superintendency. Recipients of donations that reach the country after the state of emergency has formally ended will have to comply with the ordinary procedures for applying to the Superintendency for a tax exemption before the latter can authorize the entry of the donations to Guatemala. Such donations shall be governed not by Decree No. 101-97 of the Congress of the Republic: Budget Act, but by Legislative Decree No. 109-96: Act establishing the National Coordination Office for the Reduction of Natural and Man-made Disasters and its implementing regulations, under which donations are exempt from all taxes, including import tariff duties and value-added tax.

Article 9. Cooperation. All entities and units of the executive branch, as well as those indicated in article 4 of Decree No. 109-96 of the Congress of the Republic, shall participate and cooperate within their sphere of competence in order to ensure that the measures decided upon for guaranteeing the provision of essential public services to the population are implemented.

Article 10. Protection of persons and their property. The Ministry of the Interior shall take all necessary measures forthwith to ensure the safety of persons and their property, prevent any unlawful act and guarantee the maintenance of peace and public order.

Article 11. Administrative and budgetary management. The Ministry of Public Finance is hereby authorized to identify and allocate the budgetary resources needed to deal with this emergency, to transfer financial resources to spending units in accordance with their legal mandates and to facilitate the corresponding administrative procedures for the timely and appropriate receipt of donations in accordance with article 8 of this Decree.



Article 12. Notification. For the purposes of articles 138 and 139 of the Political Constitution of the Republic of Guatemala, the content of this Decree shall be communicated to the Congress of the Republic. In accordance with article 32 of the Public Order Act, a detailed report on the events that occurred and the measures that were taken during the emergency shall be submitted to Congress in due course.

Article 13. Entry into force. This Decree shall enter into force immediately and shall be published in the Central American Gazette.

(Signed) Jimmy Morales Cabrera  
President of the Republic of Guatemala

(Signed) Jafeth Ernesto Cabrera Franco  
Vice-President of the Republic

(Signed) Francisco Manuel Rivas Lara  
Minister of the Interior

II

Ministry of Foreign Affairs  
Guatemala, Central America

DH/360-000-416-16  
Guatemala City, 27 June 2016

Sir,

I have the honour to inform you, pursuant to article 4 (3) of the International Covenant on Civil and Political Rights, that on 21 June 2016, in concert with the Cabinet, Mr. Jimmy Morales Cabrera, President of the Republic of Guatemala, issued Government Decree No. 2-2016 declaring a state of emergency in the municipality of Jerez, Department of Jutiapa, for 30 days beginning from the date of entry into force of the decree.

The state of emergency was declared as a result of landslides caused by heavy rainfall in the municipality of Jerez, Department of Jutiapa, which damaged roads, housing, schools, health facilities and other infrastructure and impaired the provision of essential services, as well as affecting production activities and human development. Accordingly, the measure is aimed at mitigating the damage, repairing roads and buildings, restoring essential services and minimizing the impact, as well as enabling the necessary measures to be taken, in places where the circumstances so warrant, to avoid or reduce the impact of the disaster and, above all, to protect the life, physical integrity and safety of the affected or at-risk population and to safeguard their property.

In this connection, measures have been taken to restrict the application of article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights with respect to liberty of movement.

I should be grateful if you would inform the other States Parties to the International Covenant on Civil and Political Rights accordingly.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

(Signed) Alicia V. Castillo Sosa  
Deputy Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

Organe exécutif  
Cabinet du Président de la République  
Décret n° 2-2016  
Guatemala, 21 juin 2016

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CONSIDÉRANT que l'État et ses autorités sont tenus de garantir aux habitants du Guatemala la pleine jouissance des droits consacrés dans la Constitution politique de la République du Guatemala et qu'en cas de calamité publique, le plein exercice de certains droits peut être suspendu, sous réserve d'une déclaration du Président de la République en Conseil des ministres décrivant la nature et la gravité de la situation et sous réserve que pareilles mesures juridiques ne soient prises que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires, conformément à la loi sur l'ordre public,

CONSIDÉRANT que les fortes pluies touchant l'ensemble du territoire national, en particulier la municipalité de Jerez (département de Jutiapa), ont provoqué des glissements de terrain sur les pentes du volcan Chingo et des coulées de boue, des éboulements et des chutes d'autres débris sur des zones habitées, endommageant des routes, des logements, des écoles, des établissements de santé et d'autres infrastructures et entravant la fourniture de services essentiels, et vu que, les autorités locales craignant que la municipalité ne soit ensevelie sous la terre et les déjections du volcan si les glissements de terrain persistent, toutes les mesures possibles doivent être prises d'urgence pour reconstruire, remettre en état et prêter assistance et qu'à cette fin, il convient de prendre un décret déclarant l'état de calamité publique dans la municipalité susmentionnée,

CONSIDÉRANT que l'organe de coordination nationale des interventions en situation de catastrophe d'origine naturelle ou artificielle (CONRED) est une institution de l'État guatémaltèque créée dans l'objectif de prévenir et limiter les dégâts causés par les catastrophes et d'appuyer les interventions à cet égard ainsi que de faciliter le relèvement et la reconstruction, et vu ses fonctions énoncées dans le décret législatif n° 109-96, lui conférant la responsabilité de coordonner l'action des pouvoirs publics et du secteur privé à cette fin et déclarant la primauté de son autorité s'agissant des mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle et anthropique,

EN CONSÉQUENCE, vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles premier, 2, 3, 138, 182 et 183 f) de la Constitution politique de la République du Guatemala, et sur la base des articles 139 de la Constitution, premier, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 et 36 du décret n° 7 de l'Assemblée nationale constituante portant loi sur l'ordre public et 44 du décret n° 57-92 du Congrès de la République portant loi sur les marchés publics,

EN CONSEIL DES MINISTRES,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article premier. Déclaration. L'état de calamité publique est déclaré dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) en République du Guatemala.

Article 2. Justification. L'état de calamité publique est déclaré en raison des glissements de terrain causés par les fortes pluies tombées sur la municipalité de Jerez (département de Jutiapa), qui ont endommagé des routes, des logements, des écoles, des établissements de santé et d'autres infrastructures et entravé la fourniture de services essentiels, ainsi que les activités touchant la production et le développement humain.

Article 3. Objectif. La déclaration d'état de calamité publique a pour objectif de faciliter la limitation des dégâts, la remise en état de la voirie et des bâtiments, la reprise des services essentiels et la réduction des répercussions, ainsi que de permettre la prise de mesures dans les zones où cela est justifié, afin d'éviter ou de réduire les effets de la calamité et, avant tout, de préserver la vie et l'intégrité physique des populations à risque, d'assurer leur sécurité et de protéger leurs biens.

Article 4. Durée d'application. L'état de calamité publique s'appliquera pour une durée de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5. Droits soumis à des restrictions. Le plein exercice des droits prévus par les articles 5 et 26 de la Constitution politique de la République du Guatemala sera restreint pendant la période visée à l'article précédent.

Article 6. Mesures. Pendant la période où l'état de calamité publique est en vigueur, les mesures ci-après sont appliquées :

a) Engagement de toute action nécessaire pour remédier aux dommages causés par les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies tombées sur la municipalité de Jerez (département de Jutiapa), notamment les coulées de boue et les éboulements provenant du volcan Chingo, et pour limiter les risques ainsi posés, toute action devant être menée selon certaines modalités et circonstances et dans certains lieux compte tenu de chaque situation particulière, l'organe CONRED coordonnant les activités correspondantes;

b) Restriction du droit à la liberté de circulation et du droit au changement ou maintien de résidence des personnes se trouvant dans les localités touchées ou à risque, dans la mesure où les circonstances l'exigent;

c) Mise en place de cordons sanitaires limitant la circulation des véhicules et empêchant l'entrée des personnes dans les zones touchées ou à risque, dans la mesure où les circonstances l'exigent;

d) Obligation faite à tout particulier de fournir l'assistance et la coopération jugées indispensables pour maîtriser plus efficacement la situation dans les zones touchées;

e) Encouragement au changement de résidence ciblant les riverains de la zone dite « à haut risque », la priorité étant donnée aux résidents des zones où les infrastructures et les logements ont été détruits et où les services ont cessé de fonctionner;

f) Ordre aux autorités civiles et militaires, en coordination avec l'organe compétent, CONRED, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver la vie et l'intégrité physique, assurer la sécurité et protéger les biens des résidents concernés et garantir la fourniture de services publics essentiels de base.

Article 7. Marchés publics. Conformément au décret n° 57-92 du Congrès de la République portant loi sur les marchés publics, tant que l'état de calamité publique reste en vigueur, les organismes et services publics ne sont pas tenus d'appliquer les procédures d'appel d'offres ou de demande de devis pour acquérir des biens et fournitures ou commanditer des travaux ou services qui sont indispensables pour remédier aux situations relevant de l'état de calamité publique déclaré par le présent décret, situations qui ont provoqué ou pourraient provoquer incessamment l'interruption des services publics. En tout état de cause, les marchés publics sont publiés conformément à la réglementation de l'application de la loi sur les marchés publics.

Article 8. Dons, aide et assistance humanitaires, assistance au relèvement et autre assistance connexe. Les dons, l'aide et l'assistance humanitaires, l'assistance au relèvement et toute autre forme d'assistance connexe, qui contribuent à aider, remettre en état et reconstruire la municipalité de Jerez ainsi qu'à renforcer ses capacités locales doivent être enregistrés auprès de l'organe de coordination, CONRED, et dûment justifiés par une demande d'aide et assistance humanitaires internationales émanant du Ministère des affaires étrangères de la République du Guatemala et doivent, dans tous les cas, être conformes aux us, barrières tarifaires et non tarifaires et règles en vigueur dans le pays, dont seront informés les organismes de coopération internationale lorsqu'ils recevront la demande d'assistance humanitaire internationale. Lorsque des dons sont destinés à d'autres institutions publiques ou à des organisations non gouvernementales nationales ou internationales dûment accréditées et représentées dans le pays, le destinataire doit les enregistrer auprès de l'organisme CONRED avant d'entreprendre les procédures d'importation. Les dons importés doivent être dûment conformes aux règles et critères arrêtés par l'organisme CONRED. Dans tous les cas, l'entrée de dons exonérés demeure sous le contrôle et la supervision de la Direction générale de l'administration des impôts. Les bénéficiaires de dons devant entrer dans le pays après la date officielle de fin de l'état de calamité publique seront tenus de suivre les procédures ordinaires de demande d'exonération fiscale auprès de la Direction générale de l'administration des impôts pour que celle-ci puisse autoriser l'entrée des dons au Guatemala. Pareils dons ne sont pas soumis au décret n° 101-97 du Congrès de la République portant loi budgétaire, mais sont régis par le décret législatif n° 109-96 portant loi et règlement d'application relatif à l'organisme CONRED, qui dispose que les dons sont exonérés de tous impôts, y compris des droits de douane à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 9. Coopération. Tous les organes et services de l'exécutif, ainsi que ceux visés à l'article 4 du décret n° 109-96 du Congrès de la République, sont tenus de participer et coopérer dans leur domaine de compétence, afin de veiller à ce que les mesures décidées aux fins de garantir la fourniture des services publics essentiels à la population soient effectivement mises en œuvre.

Article 10. Protection des personnes et de leurs biens. Le Ministère de l'intérieur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et les biens des personnes, prévenir tout acte contraire à la loi et assurer le maintien de la paix et de l'ordre public.

Article 11. Gestion administrative et budgétaire. Le Ministère des finances publiques est, par le présent décret, habilité à recenser et allouer les ressources budgétaires nécessaires pour faire face à cette situation d'urgence, transférer des fonds aux services devant les dépenser conformément à leur mandat et faciliter les procédures administratives correspondantes, pour que les dons visés à l'article 8 puissent être reçus sans délai et selon qu'il convient.

Article 12. Notification. Aux fins des articles 138 et 139 de la Constitution politique de la République du Guatemala, le contenu du présent décret sera communiqué au Congrès de la République. Conformément à l'article 32 de la loi sur l'ordre public, un rapport circonstancié sur les faits survenus et les mesures prises pendant la situation d'urgence doit être soumis au Congrès en temps voulu.

Article 13. Entrée en vigueur. Le présent décret entre en vigueur immédiatement et sera publié dans le Journal officiel d'Amérique centrale.

Le Président de la République du Guatemala  
(Signé) Jimmy Morales Cabrera

Le Vice-Président de la République  
(Signé) Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Le Ministre de l'intérieur  
(Signé) Francisco Manuel Rivas Lara

II

Ministère des affaires étrangères du Guatemala

DH/360-000-416-16  
Guatemala, le 27 juin 2016

Monsieur le Secrétaire général,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, j'ai l'honneur de vous informer que, par le décret n° 2-2016 pris en Conseil des ministres le 21 juin 2016, Jimmy Morales Cabrera, Président de la République du Guatemala, a déclaré l'état de calamité publique dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) pour une durée de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

L'état de calamité publique a été déclaré à la suite des fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain dans la municipalité de Jerez (département de Jutiapa) et endommagé les infrastructures routières, résidentielles, scolaires, sanitaires et autres, nuisant ainsi à la prestation des services élémentaires, aux activités de production et au développement humain. La déclaration d'état de calamité publique a pour objectif d'aider à limiter les dégâts, faciliter la remise en état des infrastructures routières et structurelles et permettre la reprise des services élémentaires, et contribuer également à éviter l'aggravation des répercussions et à permettre que, dans les zones où la situation le justifie, les mesures nécessaires soient prises pour éviter ou réduire les conséquences de la catastrophe et, principalement, pour protéger la vie, l'intégrité physique, la sécurité et les biens des populations touchées ou en situation de risque.

À cet égard, des mesures limitant l'application de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en matière de liberté de circulation, ont été adoptées.

Je vous prie de bien vouloir informer de ce qui précède les autres États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma très haute considération.

La Vice-Ministre des affaires étrangères  
(Signé) Alicia V. Castillo Sosa

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Peru**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 3 August 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 August 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Pérou**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 août 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 3 août 2016*



[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Misión Permanente del Perú  
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to  
the United Nations

7-1-SG/CA

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 056-2016-PCM publicado el pasado 30 de julio, cuya copia se acompaña, se declara por el termino de treinta días, a partir del 31 de julio de 2016, el Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao.

Cabe resaltar que oportunamente la Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prorrogas anteriores al Estado de Emergencia en la localidad indicada, siendo la última comunicada mediante Nota 7-1-SG/47 de fecha 29 de junio de 2016.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, complementados en los artículos 9 y 24(f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 2 de agosto de 2016

A la Secretaría General de la  
Organización de las Naciones Unidas  
Oficina de Asuntos Jurídicos  
Sección de Tratados  
Fax 3.3693  
**Nueva York**

**DECRETO SUPREMO  
N° 056-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, es obligación del Gobierno Constitucional garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública y a la seguridad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 083-2015-PCM, publicado el 4 de diciembre de 2015, se declara por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, computado a partir de la fecha de publicación del acotado dispositivo, el Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao, disponiendo que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno;

Que, posteriormente, con Decretos Supremos N°s 004-2016-PCM, 013-2016-PCM y 024-2016-PCM, se proroga el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao, por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, del 18 de enero al 2 de marzo de 2016, del 3 de marzo al 16 de abril de 2016 y del 17 de abril al 31 de mayo de 2016, respectivamente;

Que, con Decreto Supremo N° 036-2016-PCM, se proroga el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao, por sesenta (60) días calendario, a partir del 1 de junio de 2016;

Que, mediante Oficio N° 495-2016-DGPNP/SA, el Director General de la Policía Nacional del Perú recomienda que se prorogue el Estado de Emergencia declarado en la Provincia Constitucional del Callao por Decreto Supremo N° 083-2015-PCM, sustentando dicha petición en el Oficio N° 82-2016-REGPOL-CALLAO/JEM-UNIPL0 y en el Informe N° 84-2016-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPL0, emitidos por la Región Policial Callao, a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en todas sus modalidades;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere nuevo Decreto;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

**Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia**

Prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 31 de julio de 2016, en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno.

**Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales**

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

**Artículo 3.- Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD  
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO MARTÍN ZAVALA LOMBARDI  
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS  
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ  
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 056-2016-PCM issued on 30 July 2016 (copy attached), a state of emergency in the Constitutional Province of Callao has been declared for 30 days, with effect from 31 July 2016.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned place, the most recent communication being note No. 7-1-SG/47 dated 29 June 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

**Extension of the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao**

**Supreme Decree No. 056-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration and throughout the national territory or in a part thereof, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That the constitutional Government has an obligation to guarantee the right of citizens to order, public peace and security;

That, by Supreme Decree No. 083-2015-PCM, issued on 4 December 2015, a state of emergency was declared in the Constitutional Province of Callao for a period of forty-five (45) calendar days, with effect from the date of issuance of that instrument, which provides that the National Police of Peru shall maintain control of public order;

That, subsequently by Supreme Decrees Nos. 004-2016-PCM, 013-2016-PCM and 024-2016-PCM, the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao was extended for an additional period of forty-five (45) calendar days, from 18 January to 2 March 2016, from 3 March to 16 April 2016 and from 17 April to 31 May 2016, respectively;

That, by Supreme Decree No. 036-2016-PCM, the state of emergency declared in the Constitutional Province of Callao was extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 1 June 2016;

That, by means of note No. 495-2016-DGPNP/SA, the Director General of the National Police of Peru recommended that the state of emergency declared by Supreme Decree No. 083-2015-PCM in the Constitutional Province of Callao be extended, basing that recommendation on note No. 82-2016-REGPOL-CALLAO/JEM-UNIPLO and report No. 84-2016-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO from the Callao Police Region, in order to strengthen efforts against public insecurity and organized crime in all its forms;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new decree;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Constitutional Province of Callao is hereby extended for a period of thirty (30) calendar days, with effect from 31 July 2016. The National Police of Peru shall maintain public order.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the location referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 29 July 2016.

Pedro Pablo Kuczynski Godard  
President of the Republic

Fernando Martín Zavala Lombardi  
President of the Council of Ministers

Carlos Basombrío Iglesias  
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello de Rodríguez  
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'aux termes du décret suprême n° 056-2016-PCM, publié le 30 juillet 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence est déclaré, pour une durée de 30 jours commençant le 31 juillet 2016, dans la province constitutionnelle du Callao.

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/47 du 29 juin 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

## **Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao**

### **Décret suprême n° 056-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation ;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et l'obligation d'en informer le Congrès et la Commission permanente, pour une durée déterminée, dans la totalité ou une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophe ou de situation grave troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire ;

Que le Gouvernement est tenu de garantir le droit des citoyens à l'ordre, la tranquillité publique et la sécurité ;

Que, par le décret suprême n° 083-2015-PCM publié le 4 décembre 2015, un état d'urgence a été déclaré dans la province constitutionnelle du Callao, pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter du jour de la publication dudit instrument, disposant que la Police nationale du Pérou maintiendra le contrôle de l'ordre public ;

Que, par la suite, par les décrets suprêmes n°s 004-2016-PCM, 013-2016-PCM et 024-2016-PCM, l'état d'urgence dans la province constitutionnelle du Callao a été prorogé pour une durée supplémentaire de quarante-cinq (45) jours calendaires, du 18 janvier au 2 mars 2016, du 3 mars au 16 avril 2016 et du 17 avril au 31 mai 2016, respectivement ;

Que, par le décret suprême n° 036-2016-PCM, l'état d'urgence déclaré dans la province constitutionnelle du Callao a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires à compter du 1<sup>er</sup> juin 2016 ;

Que, par sa communication n° 495-2016-DGPNP/SA, le Directeur général de la Police nationale du Pérou a recommandé que soit prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret suprême n° 083-2015-PCM dans la province constitutionnelle du Callao afin de renforcer la lutte contre l'insécurité des citoyens et la criminalité organisée sous toute ses formes, fondant sa recommandation sur la communication n° 82-2016-REGPOL-CALLAO/JEM-UNIPLO et sur le rapport n° 84-2016-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO de la Police de la région du Callao ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif) ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de trente (30) jours calendaires, à compter du 31 juillet 2016, l'état d'urgence dans la province constitutionnelle du Callao. La Police nationale du Pérou maintiendra l'ordre public.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article premier et dans la circonscription y visée, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile, garantis aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Contrescing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-neuf juillet deux mille seize.

Le Président de la République  
Pedro Pablo Kuczynski Godard

Le Président du Conseil des ministres  
Fernando Martín Zavala Lombardi

Le Ministre de l'intérieur  
Carlos Basombrío Iglesias

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme  
María Soledad Pérez Tello de Rodríguez



NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Peru**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 3 August 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 August 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Pérou**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 août 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 3 août 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Misión Permanente del Perú  
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to  
the United Nations

7-1-SG/65

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 029-2016-PCM publicado el pasado 5 de mayo, cuya copia se acompaña, se declara por el término de cuarenta y cinco días, a partir del 10 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash.

Cabe resaltar que oportunamente la Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prorrogas anteriores al Estado de Emergencia en las localidades indicadas, siendo la última indicada mediante Nota 7-1-SG/61 de fecha 26 de julio de 2016.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio, contemplados en los incisos 9 y 24(f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 2 de agosto de 2016

A la Secretaría General de la  
Organización de las Naciones Unidas  
Oficina de Asuntos Jurídicos  
Sección de Tratados  
Fax 3.3693  
Nueva York

**DECRETO SUPREMO  
N° 029-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, mediante Oficio N° 309-2016-DGPNP/SA, el Director General de la Policía Nacional del Perú recomienda se prorrogue el Estado de Emergencia declarado en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash, a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en sus diferentes modalidades y restablecer el principio de autoridad, sustentando dicha petición en el Oficio N° 107-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú y en el Informe N° 018-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF. de la Jefatura de la Región Policial Áncash de la Policía Nacional del Perú, por medio de los cuales se comunica que la declaratoria del estado de emergencia ha permitido disminuir el accionar delictivo en dichas provincias, como resultado de las acciones de la Policía Nacional del Perú, a través de intervenciones en delitos flagrantes, patrullajes preventivos y operativos policiales, por lo que resulta necesaria la prórroga del estado de emergencia declarado a través del Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, con el propósito de continuar con la lucha frontal contra la delincuencia común y organizada en sus diferentes modalidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2016, se declaró por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 020-2016-PCM, publicado el 24 de marzo de 2016, se prorrogó el Estado de Emergencia declarado en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash, por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, del 26 de marzo al 09 de mayo de 2016;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

**Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia**

Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 10 de mayo de 2016, en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno.

**Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales**

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

**Artículo 3.- Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO  
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE  
Ministro del Interior

ALDO VÁSQUEZ RÍOS  
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 029-2016-PCM issued on 5 May 2016 (copy attached), a state of emergency has been declared for 45 days in the Provinces of Santa and Casma, Department of Ancash, with effect from 10 May 2016.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned places, the most recent communication being note No. 7-1-SG/61 of 26 July 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended, in order to consolidate peace in the area and in the country.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

**Extension of the state of emergency declared in the Provinces of Santa and Casma,  
Department of Áncash**

**Supreme Decree No. 029-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration and throughout the national territory or in a part thereof, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That, by means of note No. 309-2016-DGPNP/SA, the Director General of the National Police of Peru recommends extending the state of emergency declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, in order to strengthen the fight against insecurity and organized crime in its various forms, and restore the principle of authority, basing that recommendation on note No. 107-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, from the National Directorate of Police Operations of the National Police of Peru, and report No. 018-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF, from the Chief of the Ancash Police Region of the National Police of Peru, which indicate that the declaration of a state of emergency has reduced the crime rate in those provinces, as a result of the actions of the National Police of Peru, including action taken in the case of flagrant offences and preventive and operational police patrols, and it is therefore necessary to extend the state of emergency declared by means of Supreme Decree No. 009-2016-PCM in order to continue the frontal assault on common and organized crime in its various forms;

That, by Supreme Decree No. 009-2016-PCM, published in the Official Journal, El Peruano, on 10 February 2016, a state of emergency was declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, for a period of forty-five (45) calendar days;

That, subsequently by Supreme Decree No. 020-2016-PCM issued on 24 March 2016, the state of emergency declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, was extended for an additional period of forty-five (45) calendar days, from 26 March to 9 May 2016;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new decree;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the

Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, is hereby extended for a period of forty-five (45) calendar days, with effect from 10 May 2016. The National Police of Peru shall maintain public order.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the extension of the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 4 May 2016.

Ollanta Humala Tasso  
President of the Republic

Pedro Cateriano Bellido  
President of the Council of Ministers

José Luis Pérez Guadalupe  
Minister of the Interior

Aldo Vásquez Ríos  
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'aux termes du décret suprême n° 029-2016-PCM, publié le 5 mai 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours commençant le 10 mai 2016, dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash).

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/61 du 26 juillet 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

**Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma  
(département d'Áncash)**

**Décret suprême n° 029-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation ;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et l'obligation d'en informer le Congrès et la Commission permanente, pour une durée déterminée, dans la totalité ou une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophe ou de situation grave troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire ;

Que, par la communication n° 309-2016-DGPNP/SA, le Directeur général de la Police nationale du Pérou recommande que l'état d'urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) soit prorogé afin de renforcer la lutte contre l'insécurité publique et la criminalité organisée sous toutes ses formes et de rétablir le principe d'autorité, cette recommandation étant appuyée par la communication n° 107-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE de la Direction nationale des opérations policières de la Police nationale du Pérou et par le rapport n° 018-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF de la préfecture de police de la région d'Áncash (Police nationale du Pérou), dont il ressort que la déclaration de l'état d'urgence a permis de réduire la délinquance dans ces provinces grâce à l'action de la Police nationale du Pérou, qui est intervenue dans des cas de flagrant délit, a effectué des patrouilles de prévention et conduit des opérations policières, de sorte qu'il y a lieu de proroger l'état d'urgence déclaré par le décret suprême n° 009-2016-PCM afin de continuer à lutter contre la délinquance et la criminalité organisée sous toutes ses formes ;

Que, par le décret suprême n° 009-2016-PCM publié dans le journal officiel « El Peruano » le 10 février 2016, un état d'urgence a été déclaré dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires ;

Que, par la suite, par le décret suprême n° 020-2016-PCM publié le 24 mars 2016, l'état d'urgence dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) a été prorogé pour une durée supplémentaire de quarante-cinq (45) jours calendaires du 26 mars au 9 mai 2016 ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au



paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif) ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter du 10 mai 2016, l'état d'urgence dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash). La Police nationale du Pérou maintiendra l'ordre public.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence prorogé à l'article premier et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile, garantis aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Contresaignement

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le quatre mai deux mille seize.

Le Président de la République  
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres  
Pedro Cateriano Bellido

Le Ministre de l'intérieur  
José Luis Pérez Guadalupe

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme  
Aldo Vásquez Ríos

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Peru**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 3 August 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 August 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Pérou**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 août 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 3 août 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Misión Permanente del Perú  
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to  
the United Nations

7-1-SG/66

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 044-2016-PCM publicado el pasado 12 de julio, cuya copia se acompaña, se prorrogó por sesenta días, a partir del 13 de julio de 2016, el Estado de Emergencia declarado en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uhuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Hancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcátán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Cabe resaltar que oportunamente la Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prórrogas anteriores al Estado de Emergencia declarado en las localidades indicadas, siendo la última comunicada mediante Nota 7-1-SG/60, de fecha 26 de julio de 2016.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, complementados en los artículos 9, 11, 12 y 24(f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17°, 12°, 21° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 2 de agosto de 2016

A la Secretaría General de la  
Organización de las Naciones Unidas  
Oficina de Asuntos Jurídicos  
Sección de Tratados  
Fax 3.3693  
Nueva York

**DECRETO SUPREMO  
N° 044-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2016-PCM, publicado el 12 de mayo de 2016, se prorroga por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 14 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en su Título II se establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa del Estado de Derecho;

Que, el artículo 3 del acotado Decreto Legislativo N° 1095 establece que se considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones: (i) están minimamente organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego; y, (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimita el ámbito de aplicación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en las zonas del VRAEM que se encuentran en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento en contrarrestar los remanentes terroristas, así como en la lucha frontal contra el Tráfico ilícito de Drogas y otras actividades ilícitas, respectivamente;

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno precisar que los remanentes terroristas constituyen un grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes señaladas;

Que, teniendo en cuenta el plazo de vigencia del Estado de Emergencia referido en el primer considerando y de acuerdo con lo manifestado por el Director General de la Policía Nacional del Perú,

mediante el Oficio N° 449-2016-DGPNP/SA, de fecha 28 de junio de 2016, aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y distritos anteriormente indicados, por lo que es necesario prorrogar el mismo, a fin que la presencia de la Policía Nacional del Perú, con sus correspondientes acciones, permita que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la zona y del país;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

**Artículo 1.- Prórroga de Estado de Emergencia**

Prorrogar por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 13 de julio de 2016, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

**Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales**

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

**Artículo 3.- Control del Orden Interno**

Disponer que la Policía Nacional del Perú asuma el control del Orden Interno en tanto dure el Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

Las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional del Perú para el logro de dicho objetivo en los departamentos, provincias y distritos declarados en Estado de Emergencia.

**Artículo 4.- De la Intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú**

La intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 y en el Decreto Legislativo N° 1186, respectivamente, así como a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, que dispone que las Fuerzas Armadas orientan su misionamiento en contrarrestar el accionar de los grupos hostiles (remanentes terroristas) y la Policía Nacional del Perú en

su lucha frontal contra el Tráfico Ilícito de Drogas y otras actividades ilícitas.

**Artículo 5.- Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO  
Presidente del Consejo de Ministros

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ  
Ministro de Defensa

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE  
Ministro del Interior

ALDO VÁSQUEZ RÍOS  
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 044-2016-PCM, issued on 12 July 2016 (copy attached), the state of emergency declared in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiway in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, has been extended for 60 days, with effect from 13 July 2016.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned places, the most recent communication being note No. 7-1-SG/60 of 26 July 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17, 12, 21 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

**Extension of the state of emergency declared in various districts and provinces of the Departments of Ayacucho, Huancavelica, Cusco and Junín**

**Supreme Decree No. 044-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That, by Supreme Decree No. 031-2016-PCM, issued on 12 May 2016, the state of emergency in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiway in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andamarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, was extended for 60 calendar days, with effect from 14 May 2016;

That Legislative Decree No. 1095 established the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory; and the rules for the use of force in other violent situations, in areas in which a state of emergency has been declared and where the National Police of Peru is responsible for public order, discharging its constitutional duties by using its powers and enforcement capabilities to protect society and defend the rule of law, are set forth in Title II thereof;

That pursuant to article 3 of Legislative Decree No. 1095, hostile groups are defined as a plurality of individuals in the national territory who (i) have a minimum degree of organization; (ii) have the capacity and intention of confronting the State in a prolonged manner by means of firearms; and (iii) participate in hostilities or collaborate in their realization;

That Supreme Decree No. 085-2015-PCM, of 10 December 2015, set out the limits of the scope of action of the armed forces and the National Police of Peru in the areas of the valley of the Apurímac, Ene and Mantaro rivers in which a state of emergency has been declared, their mission being to counteract the remaining terrorists and to carry out a frontal assault on the illicit trafficking in drugs and other illegal activities, respectively;

That in this connection, the remaining terrorists constitute a hostile group, falling under the aforementioned definition;

That, noting the period of validity of the state of emergency referred to in the first paragraph, the Director General of the National Police of Peru has reported, in note No. 449-2016-DGPNP/SA of 28 June 2016, that the circumstances that gave rise to the declaration of a state of emergency in the above-mentioned provinces and districts still prevail; and that it is therefore necessary to extend it, in order to enable the population, through the presence and corresponding action of the National Police of Peru, to identify with the ends or objectives sought by the national Government, namely the consolidation of peace in the area and in the country as a whole;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new Supreme Decree;

That Legislative Decree No. 1186, the Legislative Decree regulating the use of force by the National Police of Peru, clarifies the use of force in the performance of police duties, the levels of use of force, the circumstances in which force may be used and the rules of conduct in the use of force;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of Peru; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the Districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, and Anchihuay in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the Districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the Districts of Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the Districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Río Tambo in the Province of Satipo, in the Districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the Districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, is hereby extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 13 July 2016.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, inviolability of the home and freedom of assembly and of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.



**Article 3: Maintenance of public order**

The National Police of Peru shall be responsible for maintaining public order during the state of emergency declared in article 1 hereof.

The armed forces shall assist the Peruvian National Police in achieving this objective in the departments, provinces and districts in which a state of emergency has been declared.

**Article 4: Parameters of action by the armed forces and the National Police of Peru**

The armed forces and the National Police of Peru shall act in accordance with Legislative Decree Nos. 1095 and 1186, respectively, as well as with the provisions of Supreme Decree No. 085-2015-PCM, which provides that the mission of the armed forces shall be to counteract hostile groups (the remaining terrorists) and the mission of the National Police of Peru shall be to carry out a frontal assault on the illicit trafficking in drugs and other illegal activities.

**Article 5: Endorsement**

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 11 July 2016.

Ollanta Humala Tasso  
President of the Republic

Pedro Cateriano Bellido  
President of the Council of Ministers

Jakke Valakivi Álvarez  
Minister of Defence

José Luis Pérez Guadalupe  
Minister of the Interior

Aldo Vásquez Ríos  
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que par le décret suprême n° 044-2016-PCM, publié le 12 juillet 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llohegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín), a été prorogé pour une durée de 60 jours commençant le 13 juillet 2016.

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/60 du 26 juillet 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17, 12, 21 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

**Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les districts et provinces des départements d'Ayacucho, de Huancavelica, de Cusco et de Junín**

**Décret suprême n° 044-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que, par le décret suprême n° 031-2016-PCM, publié le 12 mai 2016, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 14 mai 2016 dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llohegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín) ;

Que, par le Décret législatif n° 1095, a été établi le cadre légal qui régit les principes, formes, conditions et limites pour l'emploi et l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national et que le Titre II de ce Décret énonce les normes sur l'usage de la force en d'autres situations de violence, dans des zones pour lesquelles l'état d'urgence a été déclaré, le contrôle de l'ordre interne étant à la charge de la Police nationale du Pérou dans l'accomplissement de sa fonction constitutionnelle, par l'usage de son potentiel et sa capacité coercitive pour la protection de la société, en défense de l'état de droit ;

Qu'aux termes de l'article 3 du Décret législatif n° 1095, est réputée groupe hostile toute pluralité d'individus se trouvant sur le territoire national et réunissant les trois conditions suivantes : i) avoir un degré minimum d'organisation ; ii) posséder la capacité d'affronter l'État et être décidé à le faire, de manière prolongée, au moyen d'armes à feu ; iii) participer aux hostilités ou collaborer à leur réalisation ;

Que le décret suprême n° 085-2015-PCM, en date du 10 décembre 2015, a été délimité le champ d'action des forces armées et de la Police nationale du Pérou dans les zones de la vallée des rivières d'Apurimac, d'Ene et de Mantaro se trouvant sous régime d'état d'urgence, leur mission consistant dans l'ensemble à combattre les terroristes restants et à mener une lutte frontale contre le trafic illicite de stupéfiants et autres activités illicites, respectivement ;

Que, dans cet ordre d'idées, il convient de préciser que les terroristes restants constituent un groupe hostile, étant donné qu'ils réunissent les conditions précitées ;

Que, compte tenu du délai d'application de l'état d'urgence mentionné au premier alinéa et conformément à ce qui a été précisé par le Directeur général de la Police nationale du Pérou, dans la communication officielle n° 449-2016-DGPNP/SA, en date du 28 juin 2016, sont encore présentes les conditions qui ont motivé la déclaration de l'état d'urgence dans les provinces et districts susmentionnés, d'où la nécessité de le proroger, afin que la présence de la Police nationale du Pérou permette, moyennant la prise des mesures correspondantes par elle, que la population s'identifie aux buts ou objectifs recherchés par le Gouvernement national, à savoir la consolidation de la pacification de la zone et du pays ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Que, conformément au Décret législatif n° 1186, qui régit l'usage de la force par la Police nationale du Pérou, l'usage de la force dans l'exercice de la fonction policière est requise, ainsi que les niveaux de son usage, de même que les circonstances et règles de conduite applicables à l'usage de la force ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 de la Constitution politique du Pérou ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 13 juillet 2016 l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, d'Ayahuanco, de Santillana, de Chaca, de Sivia, de Llochegua, de Canayre, d'Uchuraccay et de Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, d'Anco, d'Ayna, de Chungui, de Santa Rosa, de Tambo, de Samugari, d'Anchihuay de la province de La Mar (département d'Ayacucho), dans les districts de Pampas, de Huachocolpa, de Quishuar, de Salcabamba, de Salcahuasi, de Surcubamba, de Tintay Puncu, de Roble et d'Andaymarca de la province de Tayacaja (département de Huancavelica), dans les districts de Kimbiri, de Pichari, de Vilcabamba, d'Inkawasi, de Villa Kintiarina et de Villa Virgen de la province de La Convención (département de Cusco), dans les districts de Llaylla, de Mazamari, de Pampa Hermosa, de Pangoa, de Vizcatán del Ene et de Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts d'Andamarca et de Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et de Pariahuanca de la province de Huancayo (département de Junín).

Article 2 – Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence prorogé à l'article premier et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, garantis aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 – Maintien de l'ordre public

La Police nationale du Pérou assure le maintien de l'ordre public pendant toute la durée de l'état d'urgence prorogé à l'article premier du présent décret.

Les forces armées soutiennent la Police nationale du Pérou dans la réalisation de cet objectif dans les départements, provinces et districts placés sous le régime de l'état d'urgence.

Article 4 – De l'intervention des forces armées et de la Police nationale du Pérou

L'intervention des forces armées et de la Police nationale du Pérou obéit aux conditions prévues par les Décrets législatifs n°s 1095 et 1186, respectivement, et aux dispositions du décret suprême n° 085-2015-PCM, qui donne pour mandat aux forces armées de combattre les agissements des groupes hostiles (les terroristes restants) et à la Police nationale péruvienne de mener une lutte frontale contre le trafic illicite de stupéfiants et autres activités illicites.

Article 5 – Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de la défense, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le onze juillet deux mille seize.

Le Président de la République  
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres  
Pedro Cateriano Bellido

Le Ministre de la défense  
Jakke Valakivi Álvarez

Le Ministre de l'intérieur  
José Luis Pérez Guadalupe

Aldo Vásquez Ríos  
Le Ministre de la justice et des droits de l'homme

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Peru**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 11 August 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 11 August 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Pérou**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 11 août 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 11 août 2016*

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Misión Permanente del Perú  
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to  
the United Nations

7-1-SG/68

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas – Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que, mediante Decreto Supremo N° 041-2016-PCM publicado el pasado 23 de junio, cuya copia se acompaña, se declara por el término de cuarenta y cinco días, a partir del 24 de junio de 2016, el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma del departamento de Áncash.

Cabe resaltar que oportunamente esta Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prórrogas anteriores al Estado de Emergencia en las localidades indicadas, siendo la última comunicada mediante Nota 7-1-SG/65 de fecha 2 de agosto de 2016.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos relativos a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de domicilio, contemplados en los incisos 9 y 24(f) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y en los Artículos 17° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, con el motivo de consolidar la pacificación de la zona y del país.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas aprovecha la oportunidad para renovar a la Secretaría General de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta distinguida consideración.

Nueva York, 10 de agosto de 2016

A la Secretaría General de la  
Organización de las Naciones Unidas  
Oficina de Asuntos Jurídicos  
Sección de Tratados  
Fax 3.3693  
Nueva York

**DECRETO SUPREMO  
N° 041-2016-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, decretado en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, mediante Oficio N° 400-2016-DGPNP/SA, el Director General de la Policía Nacional del Perú recomienda se prorrogue el Estado de Emergencia declarado en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash, a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en sus diferentes modalidades y restablecer el principio de autoridad, sustentando dicha petición en el Oficio N° 173-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú y en el Informe N° 025-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF, de la Jefatura de la División Policial Chimbote de la Policía Nacional del Perú, por medio de los cuales se comunica que la declaratoria del estado de emergencia ha permitido disminuir el accionar delincuencia en dichas provincias, como resultado de las acciones de la Policía Nacional del Perú, a través de intervenciones en delitos flagrantes, patrullajes preventivos y operativos policiales, por lo que resulta necesaria la prórroga del estado de emergencia declarado a través del Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, con el propósito de continuar con la lucha frontal contra la delincuencia común y organizada en sus diferentes modalidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2016, se declara por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario el Estado de Emergencia en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash;

Que, posteriormente, el plazo mencionado precedentemente es prorrogado por Decretos Supremos N°s. 020-2016-PCM y 029-2016-PCM, por cuarenta y cinco (45) días calendario, del 26 de marzo y del 10 de mayo de 2016, respectivamente;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

**Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia**

Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 24 de junio de 2016, en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno.

**Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales**

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

**Artículo 3.- Refrendo**

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO  
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO  
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE  
Ministro del Interior

ALDO VÁSQUEZ RÍOS  
Ministro de Justicia y Derechos Humanos



[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to inform it that, by Supreme Decree No. 041-2016-PCM issued on 23 June 2016 (copy attached), a state of emergency has been declared for 45 days in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, with effect from 24 June 2016.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned places, the most recent communication being note No. 7-1-SG/65 of 2 August 2016.

During the state of emergency, the rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru and in articles 17 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, are suspended, in order to consolidate peace in the area and in the country.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

**Extension of the state of emergency declared in the Provinces of Santa and Casma,  
Department of Áncash**

**Supreme Decree No. 041-2016-PCM**

The President of the Republic

Considering:

That article 44 of the Political Constitution of Peru provides that the primary duties of the State include guaranteeing the full enjoyment of fundamental rights, protecting the population from security threats and promoting the general welfare based on justice and the comprehensive and balanced development of the nation;

That, furthermore, article 137 of the Constitution provides that the President of the Republic may, with the consent of the Council of Ministers and upon notifying Congress or the Standing Committee, declare the states of emergency stipulated therein, for a fixed duration and throughout the national territory or in a part thereof, including a state of emergency declared in the event of a disturbance of the peace or public order, a disaster, or serious circumstances affecting the life of the nation, during which time the exercise of the constitutional rights of liberty and security of person, inviolability of the home, freedom of assembly and freedom of movement in the territory may be restricted or suspended;

That, by means of note No. 400-2016-DGPNP/SA, the Director General of the National Police of Peru recommends extending the state of emergency declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, in order to strengthen the fight against insecurity and organized crime in its various forms, and restore the principle of authority, basing that recommendation on note No. 173-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, from the National Directorate of Police Operations of the National Police of Peru, and report No. 025-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF, from the Chief of the Chimbote Police Division of the National Police of Peru, which indicate that the declaration of a state of emergency has reduced the crime rate in those provinces, as a result of the actions of the National Police of Peru, including action taken in the case of flagrant offences and preventive and operational police patrols, and it is therefore necessary to extend the state of emergency declared by means of Supreme Decree No. 009-2016-PCM in order to continue the frontal assault on common and organized crime in its various forms;

That, by Supreme Decree No. 009-2016-PCM, published in the Official Journal, El Peruano, on 10 February 2016, a state of emergency was declared in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, for a period of forty-five (45) calendar days;

That, subsequently, by Supreme Decree Nos. 020-2016-PCM and 029-2016-PCM, the above-mentioned period was extended for forty-five (45) calendar days, from 26 March 2016 and from 10 May 2016, respectively;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new decree;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, and article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru, and article 4, paragraphs 2 (b) and 2 (d), of Act No. 29158, Organic Law of the Executive Branch; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the Provinces of Santa and Casma, Department of Áncash, is hereby extended for a period of forty-five (45) calendar days, with effect from 24 June 2016. The National Police of Peru shall maintain public order.

Article 2: Suspension of constitutional rights

During the extension of the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person and the inviolability of the home, recognized in article 2, paragraphs 9 and 24 (f), of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 22 June 2016.

Ollanta Humala Tasso  
President of the Republic

Pedro Cateriano Bellido  
President of the Council of Ministers

José Luis Pérez Guadalupe  
Minister of the Interior

Aldo Vásquez Ríos  
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l'Organisation et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer qu'aux termes du décret suprême n° 041-2016-PCM, publié le 23 juin 2016 et dont le texte est joint à la présente, l'état d'urgence est déclaré, pour une durée de 45 jours commençant le 24 juin 2016, dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Ancash).

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans le lieu indiqué, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/65 du 2 août 2016.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence et afin de consolider la pacification de la zone considérée et du pays, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile consacrés aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou et aux articles 17 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

**Prorogation de l'état d'urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma  
(département d'Áncash)**

**Décret suprême n° 041-2016-PCM**

Le Président de la République,

Considérant :

Que l'article 44 de la Constitution politique du Pérou dispose que l'État est tenu de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux, de protéger la population des risques menaçant sa sécurité et de veiller au bien-être général, fondé sur la justice et le développement intégral et équilibré de la nation ;

Que l'article 137 de la Constitution dispose que le Président de la République peut décréter, avec l'accord du Conseil des ministres et l'obligation d'en informer le Congrès et la Commission permanente, pour une durée déterminée, dans la totalité ou une partie du territoire national, les régimes d'exception y visés, notamment l'état d'urgence, décrété en cas de perturbation de la paix ou de l'ordre public, de catastrophe ou de situation grave troublant la vie de la nation, durant lequel peut être restreint ou suspendu l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire ;

Que, par la communication n° 400-2016-DGPNP/SA, le Directeur général de la Police nationale du Pérou recommande que l'état d'urgence déclaré dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) soit prorogé afin de renforcer la lutte contre l'insécurité publique et la criminalité organisée sous toutes ses formes et de rétablir le principe d'autorité, cette recommandation étant appuyée par la communication n° 173-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE de la Direction nationale des opérations policières de la Police nationale du Pérou et par le rapport n° 025-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/JEF de la préfecture de la Division de police de Chimbote (Police nationale du Pérou), dont il ressort que la déclaration de l'état d'urgence a permis de réduire la délinquance dans ces provinces grâce à l'action de la Police nationale du Pérou, qui est intervenue dans des cas de flagrant délit, a effectué des patrouilles de prévention et conduit des opérations policières, de sorte qu'il y a lieu de proroger l'état d'urgence déclaré par le décret suprême n° 009-2016-PCM afin de continuer à lutter contre la délinquance et la criminalité organisée sous toutes ses formes;

Que, par le décret suprême n° 009-2016-PCM publié dans le journal officiel « El Peruano » le 10 février 2016, un état d'urgence a été déclaré dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash) pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires ;

Que, par la suite, par les décrets suprêmes n°s 020-2016-PCM et 029-2016-PCM, la période susmentionnée a été prorogée pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, à partir du 26 mars 2016 et à partir du 10 mai 2016, respectivement ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême ;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 et au paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, et aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi n° 29158 (loi relative à l'organisation du pouvoir exécutif) ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé pour une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter du 24 juin 2016, l'état d'urgence dans les provinces du Santa et de Casma (département d'Áncash). La Police nationale du Pérou maintiendra l'ordre public.

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence prorogé à l'article premier et dans les circonscriptions y visées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne et à l'inviolabilité du domicile, garantis aux paragraphes 9 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, le Ministre de l'intérieur et le Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le vingt-deux juin deux mille seize.

Le Président de la République  
Ollanta Humala Tasso

Le Président du Conseil des ministres  
Pedro Cateriano Bellido

Le Ministre de l'intérieur  
José Luis Pérez Guadalupe

Le Ministre de la justice et des droits de l'homme  
Aldo Vásquez Ríos

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

**Turkey**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 2 August 2016*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 2 August 2016*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE  
L'ARTICLE 4

**Turquie**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 2 août 2016*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 2 août 2016*

[ TEXT IN ENGLISH – TEXTE EN ANGLAIS ]

2016/11235663

New York  
21 July 2016

Excellency,

I hereby communicate the following notification of the Government of the Republic of Turkey.

On 15 July 2016, a large-scale coup attempt was staged in the Republic of Turkey to overthrow the democratically-elected government and the constitutional order. This despicable attempt was foiled by the Turkish state and people acting in unity and solidarity. The coup attempt and its aftermath together with other terrorist acts have posed severe dangers to public security and order, amounting to a threat to the life of the nation in the meaning of Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The Republic of Turkey is taking the required measures as prescribed by law, in line with the national legislation and its international obligations. In this context, on 20 July 2016, the Government of Turkey declared a State of Emergency for a duration of 90 days, in accordance with the Turkish Constitution (Article 120) and the Law No. 2935 on State of Emergency (Article 3/1b). The English translation of the relevant articles of the Turkish Constitution and the Law No. 2935 on State of Emergency, as well as the Decision No. 2016-9064 of the Council of Ministers, are attached to this letter.

The decision was published in the Official Gazette and approved by the Turkish Grand National Assembly on 21 July 2016. In this process, measures taken may involve derogation from obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights regarding Articles 2/3, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 and 27, as permissible in Article 4 of the said Covenant.

I would therefore underline that this letter constitutes information for the purposes of Article 4 of the Covenant. The Government shall inform Your Excellency when it terminates the above-mentioned derogation.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Signed) Y. Halit Çevik  
Permanent Representative



Decision no. 2016/9064

It has been decided on 20 July 2016 by the Council of Ministers that; pursuant to Article 120 of the Constitution and Article 3 § 1 (b) of the Law on the State of Emergency (Law no. 2935), a nationwide state of emergency be declared from Thursday, July 21, 2016 01:00 for a period of ninety days, taking into account the recommendation dated 20 July 2016, no. 498 of the National Security Council.

Recep Tayyip ERDOĞAN  
President

Prime Minister and Members of the Cabinet

**Articles 15, 119, 120 and 121 of the Constitution of the Republic of Turkey**

**IV. Suspension of the exercise of fundamental rights and freedoms**

**ARTICLE 15** – In times of war, mobilization, martial law, or a state of emergency, the exercise of fundamental rights and freedoms may be partially or entirely suspended, or measures derogating the guarantees embodied in the Constitution may be taken to the extent required by the exigencies of the situation, as long as obligations under international law are not violated.

(As amended on May 7, 2004; Act No. 5170) Even under the circumstances indicated in the first paragraph, the individual's right to life, the integrity of his/her corporeal and spiritual existence shall be inviolable except where death occurs through acts in conformity with law of war; no one shall be compelled to reveal his/her religion, conscience, thought or opinion, nor be accused on account of them; offences and penalties shall not be made retroactive; nor shall anyone be held guilty until so proven by a court ruling.

**III. Extraordinary administration procedures**

**A. States of emergency**

**1. Declaration of state of emergency because of natural disaster or serious economic crisis**

**ARTICLE 119** – In the event of natural disaster, dangerous epidemic diseases or a serious economic crisis, the Council of Ministers meeting under the chairpersonship of the President of the Republic may declare a state of emergency in one or more regions or throughout the country for a period not exceeding six months.

**2. Declaration of state of emergency because of widespread acts of violence and serious deterioration of public order**

**ARTICLE 120** – In the event of serious indications of widespread acts of violence aimed at the destruction of the free democratic order established by the Constitution or of fundamental rights and freedoms, or serious deterioration of public order because of acts of violence, the Council of Ministers, meeting under the chairpersonship of the President of the Republic, after consultation with the National Security Council, may declare a state of emergency in one or more regions or throughout the country for a period not exceeding six months.

**3. Rules regarding the states of emergency**

**ARTICLE 121** – In the event of a declaration of a state of emergency under the provisions of Articles 119 and 120 of the Constitution, this decision shall be published in the Official Gazette and shall be immediately submitted to the Grand National Assembly of Turkey for approval. If the Grand National Assembly of Turkey is in recess, it shall be immediately assembled. The Assembly may alter the duration of the state of emergency, may extend the period for a maximum of four months each time at the request of the Council of Ministers, or may lift the state of emergency.

The financial, material and labour obligations which are to be imposed on citizens in the event of the declaration of state of emergency under Article 119 and the manner how fundamental rights and freedoms shall be restricted or suspended in line with the principles of Article 15, how and by what means the measures necessitated by the situation shall be taken, what sorts of powers shall be conferred on public servants, what kinds of changes shall be made in the status of officials as long as they are applicable to each kinds of states of emergency separately, and the extraordinary administration procedures, shall be regulated by the Act on State of Emergency.

During the state of emergency, the Council of Ministers, meeting under the chairpersonship of the President of the Republic, may issue decrees having the force of law on matters necessitated by the state of emergency. These decrees shall be published in the Official Gazette, and shall be submitted to the Grand National Assembly of Turkey on the same day for approval; the time limit and procedure for their approval by the Assembly shall be indicated in the Rules of Procedure.

**Law No. 2935 of 25 October 1983 on State of Emergency**

**Article 3 – Declaration of State of Emergency**

The Council of Ministers assembled under the chairmanship of the President shall declare a state of emergency;

(a) Whenever there is in existence one or more natural disasters, dangerous epidemic diseases or serious economic crisis;

(b) Whenever there appear serious indications resulting from widespread acts of violent which are aimed at destroying the free democratic order or fundamental rights and freedoms, or violent acts causing serious deterioration to public order, after consultation with the National Security Council, in one or more regions or throughout the country for a period not exceeding six months.

The state of emergency decision shall be published in the Official Gazette and immediately be submitted for approval of the Turkish Grand National Assembly. If the Turkish Grand National Assembly is in recess, it shall be summoned to meet immediately. The Assembly may amend the duration of the state of emergency. On a request from the Council of Ministers, the Assembly may prolong the duration each time for a period not exceeding four months, or it may terminate the state of emergency.

The Council of Ministers after declaring a state of emergency in accordance with provision (b) above, shall also consult the National Security Council before making a decision on questions related to the prolongation of the duration, alternation of the scope, or the termination of the state of emergency.

The reasons for the decision to declare a state of emergency, its duration and scope shall be broadcasted on Turkish radio and television and, if the Council of Ministers deems it necessary, also disseminated through other media.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

2016/11235663

New York  
Le 21 juillet 2016

Monsieur le Secrétaire général,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous communiquer la notification suivante du Gouvernement de la République turque.

Le 15 juillet 2016, la République turque a été le théâtre d'une tentative de coup d'état à grande échelle destinée à renverser le gouvernement élu démocratiquement et l'ordre constitutionnel. Cette méprisable tentative a été déjouée par l'état et le peuple turcs, agissant de concert et solidairement. La tentative de coup d'état et ses conséquences, associées à d'autres actes de terrorisme, ont mis gravement en péril la sécurité et l'ordre publics, et constituent une menace à l'existence de la nation au sens de l'Article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La République turque prend actuellement les mesures requises prévues par la loi, conformément à son droit national et à ses obligations internationales. C'est dans ce contexte que, le 20 juillet 2016, le Gouvernement turc a proclamé l'état d'urgence pour une durée de 90 jours, conformément à la Constitution turque (Article 120) et à la Loi n° 2935 relative à l'état d'urgence (Article 3 §1 b). La traduction en anglais des articles concernés de la Constitution turque, de la Loi n° 2935 relative à l'état d'urgence et de la Décision n° 2016-9064 du Conseil des ministres est jointe à la présente lettre.

La décision a été publiée au Journal officiel et approuvée par la Grande Assemblée nationale de Turquie, le 21 juillet 2016. Les mesures prises lors de cette procédure peuvent comprendre une dérogation aux obligations prévues aux articles 2/3, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme l'autorisent les dispositions de son Article 4.

Je souhaite, par conséquent, souligner que la présente lettre constitue une information aux fins visées à l'Article 4 dudit Pacte. Le Gouvernement vous informera quand il mettra fin à la dérogation susmentionnée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

Le Représentant permanent  
(Signé) Y. Halit Çevik

Décision n° 2016/9064

Le 20 juillet 2016, le Conseil des ministres a décidé, suite à la recommandation n° 498 du Conseil de sécurité nationale datée du 20 juillet 2016 et conformément aux dispositions de l'Article 120 de la Constitution et de l'Article 3 §1 b) de la Loi relative à l'état d'urgence (Loi n° 2935), de proclamer l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire turc à compter du jeudi 21 juillet 2016 à 1 heure, pour une durée de quatre-vingt-dix jours.

Le Président  
Recep Tayyip ERDOĞAN

Le Premier ministre et les Membres du cabinet

## **Articles 15, 119, 120 et 121 de la Constitution de la République turque**

### **IV. Suspension de l'exercice des libertés et droits fondamentaux**

**ARTICLE 15** – En cas de guerre, de mobilisation, de loi martiale ou d'état d'urgence, la situation peut nécessiter que l'exercice des libertés et droits fondamentaux soit partiellement ou totalement suspendu, ou que des mesures de dérogation aux garanties prévues par la Constitution soient prises, à condition de respecter les obligations découlant du droit international.

(Modifié par la Loi n° 5170 du 7 mai 2004) Toutefois, même dans les cas énumérés à l'alinéa premier, le droit de l'individu à la vie, ainsi que son intégrité physique et spirituelle restent inviolables, sous réserve des décès qui résultent d'actes conformes aux règles applicables dans les conflits armés ; personne n'est forcé de révéler sa religion, ni le fond de sa conscience, pensée ou opinion, et ne peut être accusé en raison de ceux-ci ; et les principes de la non-rétroactivité des peines et de la présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à sa condamnation définitive ne sont pas remis en cause.

### **III. Procédures d'administration extraordinaire**

#### **A. État d'urgence**

##### **1. Proclamation de l'état d'urgence pour cause de catastrophe naturelle ou de crise économique grave**

**ARTICLE 119** – Le Conseil des ministres, réuni sous la direction du Président de la République, peut, en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie dangereuse ou de crise économique grave, proclamer l'état d'urgence dans une ou plusieurs régions du pays ou sur l'ensemble du territoire, pendant six mois au maximum.

##### **2. Proclamation de l'état d'urgence pour cause d'actes généralisés de violence et d'altération grave de l'ordre public**

**ARTICLE 120** – En cas d'indication sérieuse d'actes généralisés de violence visant la destruction de l'ordre démocratique libre instauré par la Constitution ou des libertés et droits fondamentaux, ou en cas d'altération grave de l'ordre public due à des actes de violence, le Conseil des ministres, réuni sous la direction du Président de la République, a le droit, après consultation du Conseil de sécurité nationale, de proclamer l'état d'urgence dans une ou plusieurs régions ou sur l'ensemble du territoire pendant six mois au maximum.

##### **3. Réglementation de l'état d'urgence**

**ARTICLE 121** – Lorsque la décision de proclamer l'état d'urgence est adoptée conformément aux articles 119 et 120 de la Constitution, elle est publiée au Journal officiel et soumise immédiatement à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie n'est pas en session, elle est convoquée immédiatement. L'Assemblée peut modifier la durée de l'état d'urgence, proroger ladite durée à la demande du Conseil des ministres par des

périodes maximales de quatre mois à chaque fois, ou lever l'état d'urgence.

La Loi relative à l'état d'urgence régleme les obligations financières, matérielles et professionnelles qui peuvent être imposées aux citoyens du fait de la proclamation de l'état d'urgence en vertu de l'Article 119 ; elle régleme aussi la façon dont les libertés et droits fondamentaux sont limités ou suspendus conformément aux principes énoncés à l'Article 15, la façon dont seront prises les mesures requises par la situation et les moyens employés à cette occasion, les pouvoirs qui seront conférés aux agents de l'État et les modifications qui seront apportées au statut des fonctionnaires dans la mesure où ils sont applicables distinctement à chaque type de proclamation de l'état d'urgence, et les procédures d'administration extraordinaire.

Pendant toute la durée de l'état d'urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la direction du Président de la République, peut prendre des décrets ayant force de loi sur toutes les questions suscitées par l'état d'urgence. Ces décrets ayant force de loi sont publiés au Journal officiel et soumis le jour même à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie ; les délais et procédures d'approbation par l'Assemblée sont prévus dans son Règlement intérieur.



**Loi n° 2935 du 25 octobre 1983 relative à l'état d'urgence**

**Article 3 – Proclamation de l'état d'urgence**

Le Conseil des ministres, réuni sous la direction du Président, déclare l'état d'urgence :

- a) en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie dangereuse ou de crise économique grave ;
- b) en cas d'indication sérieuse d'actes généralisés de violence visant la destruction de l'ordre démocratique libre instauré par la Constitution ou des libertés et droits fondamentaux, ou en cas d'altération grave de l'ordre public due à des actes de violence, après consultation du Conseil de sécurité nationale,

dans une ou plusieurs régions ou sur l'ensemble du territoire pendant six mois au maximum.

La décision concernant la proclamation de l'état d'urgence est publiée au Journal officiel et soumise immédiatement à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie n'est pas en session, elle est convoquée immédiatement. L'Assemblée peut modifier la durée de l'état d'urgence. À la demande du Conseil des ministres, l'Assemblée peut proroger la durée de l'état d'urgence par des périodes maximales de quatre mois à chaque fois, ou lever l'état d'urgence.

Le Conseil des ministres, après avoir proclamé l'état d'urgence conformément à la disposition de l'alinéa b) ci-dessus, consulte également le Conseil de sécurité nationale avant de prendre une décision sur toutes les questions relatives à la prorogation de la durée, à la modification de la portée ou à la levée de l'état d'urgence.

Les raisons de la proclamation de l'état d'urgence, sa durée et sa portée seront diffusées à la radio et à la télévision turques et, si le Conseil des ministres le juge nécessaire, seront aussi communiquées par d'autres médias.